

Cuerpos sin pan, tierras sin alma

Geografía del hambre y
la esperanza en Colombia



Teófilo Cuesta-Borja

Cuerpos sin pan, Tierras sin alma:

Geografía del hambre y la esperanza en Colombia

Teofilo Cuesta-Borja¹

1. Introducción

La seguridad alimentaria constituye, en su acepción más profunda, no solo una condición básica para la supervivencia humana, sino también un derecho esencial vinculado a la dignidad, la autonomía, la justicia social y la sostenibilidad de la vida en todas sus formas. En un mundo globalizado, atravesado por dinámicas de concentración de poder, degradación ambiental y mercantilización de los bienes comunes, el acceso justo y sostenible a los alimentos se ha convertido en uno de los principales desafíos ético-políticos del siglo XXI. En este contexto global, Colombia se presenta como un caso paradigmático de contradicción estructural; un país megadiverso, con vastos territorios fértiles, una gran variedad de pisos térmicos y una riqueza cultural profundamente ligada a la producción selvática, indígena y afrodescendiente, pero que enfrenta tasas alarmantes de inseguridad alimentaria, desnutrición infantil, pérdida de soberanía alimentaria y desplazamiento rural.

Durante las últimas décadas, el país ha transitado por una serie de reformas económicas, procesos de apertura comercial y re-configuraciones territoriales, que han impactado de manera drástica sus sistemas agroalimentarios. La promoción de un modelo agroindustrial orientado a la exportación, centrado en monocultivos como la palma aceitera, el banano y el café, ha desplazado y marginado progresivamente la producción de alimentos básicos para el consumo interno. Esta lógica ha priorizado el lucro sobre la nutrición, la rentabilidad financiera sobre el equilibrio ecológico, y la eficiencia técnica sobre los conocimientos ancestrales y selváticos. La situación se agrava, si se considera el impacto prolongado del conflicto armado,

¹ Ingeniero Agrónomo, Esp. en Gestión Ambiental, Esp. en Ciencias de la complejidad, Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Doctor (PhD) en Desarrollo Regional, Doctor (PhD) en Pensamiento Complejo, Doctorando en Economía y Finanzas. Expresidente de la Asociación Colombiana de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS), Exdirector General de la Autoridad Ambiental Regional de Chocó (CODECHOCÓ), Exsecretario de Agricultura y Medio Ambiente del Chocó, Exsubdirector de Investigaciones del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "Jhon Von Newmann, Profesor Universitario (Universidad Nacional de Colombia, Universidad Lasallista, Universidad del Chocó y Universidad Politécnica de Antioquia), Director Ejecutivo de la Escuela Nacional de Autoridades Ambientales.

que no solo ha dejado millones de víctimas directas, sino que ha desestructurado las economías rurales, provocado el despojo de tierras fértiles y fracturado las redes sociales comunitarias que sostenían formas de producción alimentaria local.

El panorama actual de la seguridad alimentaria en Colombia, lejos de ser homogéneo, presenta profundas desigualdades regionales, étnicas y de género. Mientras en los centros urbanos, medianamente consolidados, las problemáticas giran en torno a la malnutrición, la obesidad infantil o la dependencia de alimentos ultraprocesados, en zonas rurales e indígenas como La Guajira, el Pacífico, el Chocó o la Amazonía, la desnutrición crónica, la pérdida de cultivos tradicionales y el hambre estructural, constituyen una realidad cotidiana. Estas brechas territoriales, lejos de ser meramente estadísticas, reflejan una injusticia ambiental y social, que debe ser abordada desde una perspectiva crítica, que trascienda los enfoques tecnocráticos y asistencialistas con los que históricamente se ha enfrentado el problema.

En efecto, las políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria en Colombia han mostrado, con excepciones puntuales, una tendencia a reducir el problema a cuestiones de oferta y demanda, eficiencia logística o inversión privada. Si bien se han implementado programas como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), o la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, la falta de continuidad, coordinación y enfoque territorial de estas iniciativas, ha limitado su efectividad. Por otro lado, la inclusión del derecho a la alimentación en el reciente Plan Nacional de Desarrollo (2022–2026), representa un avance simbólico importante, pero su materialización depende de transformaciones profundas en la estructura agraria, el modelo económico y la arquitectura institucional del país.

Desde una perspectiva crítica y compleja, la seguridad alimentaria, no puede entenderse únicamente como la disponibilidad técnica de alimentos, ni como un asunto de mercado. Implica reconocer el lugar de la alimentación en la reproducción de la vida, la construcción de identidad cultural, y la configuración del territorio. Como plantean diversos autores latinoamericanos (Leff, 2014; Max-Neef, 2010;

Sousa Santos, 2010), el abordaje de los problemas estructurales en América Latina exige una ruptura epistemológica que cuestione la racionalidad instrumental dominante y valore la diversidad de saberes, prácticas y cosmovisiones que emergen desde los territorios. En este sentido, pensar la seguridad alimentaria en Colombia, supone abrirse a una ecología de saberes y prácticas que re-valoricen el papel de las comunidades rurales, de las mujeres selvatinas, de los pueblos originarios, de los mercados locales, de las semillas nativas y de los sistemas alimentarios tradicionales, como pilares fundamentales de la soberanía alimentaria.

El presente ensayo, propone una mirada crítica e interdisciplinaria de la seguridad alimentaria en Colombia, articulando elementos de diagnóstico nacional, análisis de políticas públicas, estudio de las causas estructurales, revisión de las consecuencias sociales, económicas y ambientales, así como una perspectiva regional diferencial. El objetivo no es, solo describir el problema, sino contribuir a la construcción de una comprensión más compleja, ética y situada de las crisis alimentarias que atraviesa el país, con miras a generar propuestas transformadoras desde y para los territorios. Para ello, se parte de la convicción de que la alimentación no puede ser tratada como una mercancía más, sino como un bien común, un acto político y un derecho colectivo que interpela las formas en que producimos, distribuimos y compartimos la vida.

2. Definición y dimensiones de la seguridad alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define la seguridad alimentaria como la situación en la que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias culturales (FAO, 2009). Esta definición, reconoce cuatro dimensiones clave: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. En el contexto colombiano, estas dimensiones se ven afectadas por factores como el conflicto armado, la concentración de la tierra, el modelo agroexportador, el cambio climático y la débil institucionalidad rural.

3. Causas estructurales de la inseguridad alimentaria en Colombia

La inseguridad alimentaria en Colombia tiene raíces profundas que no pueden comprenderse al margen de los procesos históricos de concentración de la tierra, exclusión social, extractivismo económico y conflicto armado. La tenencia desigual de la tierra, por ejemplo, constituye una de las principales causas estructurales. Según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2021), menos del 1% de los propietarios posee más del 80% de la tierra de uso agropecuario, lo cual limita las posibilidades de desarrollo rural y producción de alimentos por parte de los pequeños y medianos productores.

A esto se suma, el abandono histórico del campo colombiano; la inversión pública en infraestructura, educación rural, investigación agrícola y servicios básicos, ha sido mínima comparada con los sectores urbanos e industriales. Esta marginalización, ha llevado al empobrecimiento de las comunidades rurales, y a la pérdida de saberes productivos tradicionales. Además, las políticas de liberalización comercial, iniciadas con mayor fuerza en los años 90, han expuesto a los productores nacionales a una competencia desigual frente a productos importados subsidiados, provocando el colapso de sectores clave como el maíz, el arroz y el trigo (De León, 2019).

El conflicto armado, ha sido otro factor determinante; el desplazamiento forzado ha despojado a millones de personas de sus tierras fértiles, y ha desarticulado economías selváticas sostenibles. Las dinámicas de control territorial por parte de actores armados, han interferido con la producción, comercialización y circulación de alimentos, además de generar inseguridad generalizada para los productores rurales. En regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca o el sur del Meta, el abandono del Estado, la presencia de cultivos de uso ilícitos, y la militarización, han creado un entorno hostil para la seguridad alimentaria.

Por último, el modelo extractivista, basado en minería a gran escala, monocultivos y agroindustria orientada a la exportación, ha degradado ecosistemas vitales, contaminado fuentes hídricas y erosionado la biodiversidad agrícola. El uso intensivo de agroquímicos y la expansión de la frontera agrícola, han afectado la

fertilidad de los suelos y desplazado cultivos alimentarios. Esta lógica extractiva, privilegia el lucro sobre la vida, reproduciendo patrones de desigualdad e inseguridad alimentaria en los territorios.

En suma, la inseguridad alimentaria en Colombia, no es un problema de escasez, sino de acceso, distribución y control. Las causas estructurales, están entrelazadas con las dinámicas del poder político, la configuración territorial, y los modelos de desarrollo imperantes. Superar estas causas requiere, un cambio profundo en la concepción de la tierra, el alimento y el territorio, basado en principios de equidad, sustentabilidad y justicia social.

4. Consecuencias sociales, económicas y ambientales de la inseguridad alimentaria en Colombia

Las consecuencias de la inseguridad alimentaria en Colombia se manifiestan de forma multidimensional y profunda, afectando no solo la salud de las personas, sino también la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico nacional. Esta problemática, no solo implica la falta de alimentos suficientes, sino la imposibilidad de acceder a dietas nutritivas, culturalmente apropiadas y producidas de manera sostenible.

Desde el punto de vista social, una de las consecuencias más graves es el deterioro de la salud pública, particularmente entre la población infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN, 2015), más del 10% de los niños menores de cinco años presentan desnutrición crónica, una condición que afecta de forma irreversible su desarrollo físico y cognitivo. Esta situación no solo compromete el bienestar individual, sino que perpetúa ciclos inter-generacionales de pobreza y exclusión social. La inseguridad alimentaria también impacta a las mujeres rurales, quienes a menudo son las principales responsables de la producción y el cuidado alimentario, pero enfrentan mayores barreras de acceso a la tierra, al crédito y a los mercados.

Económicamente, la inseguridad alimentaria, reduce la productividad laboral, incrementa los costos del sistema de salud, y debilita los mercados locales. La dependencia de alimentos importados, expone al país a la volatilidad de los precios

internacionales y disminuye la capacidad de respuesta ante crisis alimentarias globales. Además, la pérdida de soberanía alimentaria, debilita la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático, y otras perturbaciones externas. En este contexto, los pequeños productores enfrentan dificultades para competir en condiciones de mercado injustas, lo cual, reduce sus ingresos y desincentiva la producción local de alimentos.

Desde una perspectiva ambiental, los patrones actuales de producción y consumo alimentario, contribuyen a la degradación ecológica. La expansión de monocultivos, la deforestación, la contaminación por agroquímicos y la erosión de suelos, son consecuencias directas de un modelo agroalimentario orientado al extractivismo. A esto se suma, la pérdida de biodiversidad agrícola, especialmente de semillas nativas y criollas, que constituyen un patrimonio genético invaluable para la seguridad alimentaria del futuro. La inseguridad alimentaria, por tanto, no solo es síntoma, sino también causa de la crisis ecológica que atraviesa el país.

En síntesis, las consecuencias de la inseguridad alimentaria en Colombia, afectan múltiples dimensiones de la vida individual y colectiva. La superación de estas consecuencias, no puede lograrse únicamente mediante asistencia alimentaria o subsidios temporales, sino que requiere una transformación estructural de los sistemas alimentarios, orientada a la justicia social, la equidad territorial y la sostenibilidad ecológica.

5. Diagnóstico nacional de la seguridad alimentaria en Colombia

El estado de la seguridad alimentaria en Colombia presenta un panorama preocupante que se ha agudizado en las últimas décadas, pese a ciertos avances normativos e institucionales. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de 2015, más del 54,2 % de los hogares colombianos presentaban algún nivel de inseguridad alimentaria. Esta cifra refleja no solo un problema de disponibilidad de alimentos, sino una profunda brecha en el acceso, la estabilidad y la calidad nutricional, lo cual vulnera directamente el derecho humano a una alimentación adecuada.

La inseguridad alimentaria, se expresa de múltiples maneras. Según datos de la FAO (2022), aproximadamente 15 millones de personas en Colombia enfrentaron algún grado de inseguridad alimentaria en los últimos años, cifra que ha crecido notablemente debido a la pandemia de COVID-19, el conflicto armado persistente y la inflación alimentaria. El hambre y la malnutrición, tanto por déficit como por exceso, son indicadores claros de un modelo agroalimentario que ha fallado en garantizar bienestar para toda la población.

El informe "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe" de la FAO (2021), posiciona a Colombia como uno de los países más afectados por la inseguridad alimentaria moderada o severa en Sudamérica. Esta situación se traduce, en impactos alarmantes en la salud infantil; más del 10 % de los menores de cinco años, presentan retraso en el crecimiento (desnutrición crónica), mientras que simultáneamente ha aumentado la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, configurando un escenario de malnutrición doble.

Otro aspecto crucial del diagnóstico es la distribución geográfica y socioeconómica de la inseguridad alimentaria. Las zonas rurales concentran los mayores niveles de pobreza multidimensional y carencia alimentaria. Departamentos como La Guajira, Chocó, Vaupés, Guainía y algunos municipios de Córdoba, Antioquia y Cauca, registran las cifras más críticas, con una combinación de factores como abandono estatal, presencia de economías ilegales, deficiencias en infraestructura, y pérdida de saberes agrícolas tradicionales.

En contextos urbanos, la inseguridad alimentaria se manifiesta con particular crudeza en cinturones de miseria, barrios populares y asentamientos informales donde millones de familias dependen del trabajo informal para subsistir día a día. En estos territorios, el consumo de alimentos ultraprocesados y bajos en nutrientes, es cada vez mayor, debido a su bajo costo y fácil acceso, lo que profundiza problemas de salud pública como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad infantil.

Cabe resaltar que el cambio climático, también ha agravado las condiciones estructurales de seguridad alimentaria. Sequías prolongadas, inundaciones, pérdida

de cosechas, erosión de suelos y variabilidad climática impactan de manera directa en la producción local de alimentos, afectando especialmente a pequeños productores que no cuentan con sistemas de riego, seguros agrícolas ni infraestructura de almacenamiento.

En suma, el diagnóstico nacional de seguridad alimentaria en Colombia, muestra un sistema alimentario profundamente desigual, altamente vulnerable a factores externos, y desarticulado del principio de soberanía alimentaria. Esta situación, exige un replanteamiento profundo de las políticas públicas, así como una transformación agroecológica, territorial y cultural del modelo alimentario colombiano.

6. Evaluación crítica de las políticas públicas sobre seguridad alimentaria en Colombia

El abordaje institucional de la seguridad alimentaria en Colombia, ha estado marcado por una serie de políticas, estrategias y planes que, si bien reconocen el problema, han tenido resultados limitados en transformar estructuralmente las condiciones que lo generan. Entre las principales iniciativas se encuentra, la Ley 1355 de 2009, que establece la política de prevención y control del sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, así como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), formulado inicialmente en 2008 y reformulado en años posteriores.

A pesar de los lineamientos del PNSAN, su implementación ha estado plagada de inconsistencias, desarticulación interinstitucional y escasa financiación. Según un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2021), muchos programas carecen de seguimiento adecuado, evaluación de impacto, o no alcanzan a los sectores más vulnerables. Además, las acciones suelen estar fragmentadas entre múltiples entidades, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el ICBF y las alcaldías, sin una gobernanza clara que articule los enfoques de derecho, equidad, territorialidad y sostenibilidad.

El enfoque tecnocrático que ha primado en las políticas públicas ha privilegiado indicadores cuantitativos (calorías disponibles, coberturas alimentarias, etc.) por

encima de enfoques más integrales como la soberanía alimentaria, los saberes tradicionales, o la autonomía de los pueblos étnicos en su derecho a decidir qué producir, cómo y para quién. De hecho, la mayoría de los programas siguen operando bajo lógicas asistencialistas o de seguridad alimentaria mínima, como la entrega de paquetes nutricionales, bonos o canastas básicas, sin atender las causas estructurales del problema.

En este contexto, las políticas no han logrado cambiar el modelo agroindustrial dominante, que favorece el monocultivo para exportación, la concentración de la tierra y el uso intensivo de agroquímicos. Los selvatinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, siguen marginados de la toma de decisiones, y sus formas de producción agroecológica, carecen de apoyo técnico, crédito, comercialización y acceso a mercados.

No obstante, existen experiencias positivas, principalmente a nivel local o impulsadas por organizaciones sociales y cooperativas, que han promovido circuitos cortos de comercialización, huertas urbanas, mercados Selvatinos (antes campesinos), y sistemas alimentarios territoriales. Estas iniciativas, muestran que es posible construir un modelo alimentario basado en la justicia social, el cuidado de la biodiversidad y la autonomía comunitaria, pero requieren respaldo institucional, coherencia normativa y voluntad política sostenida.

Finalmente, la reciente propuesta de un sistema nacional de alimentación saludable y sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, representa un avance discursivo, pero su viabilidad dependerá de la asignación de recursos, la participación activa de los territorios, y el fortalecimiento de los procesos organizativos de base.

7. Perspectiva regional: El caso del Chocó

El departamento del Chocó, constituye uno de los territorios más paradigmáticos de la inseguridad alimentaria en Colombia. Su condición geográfica de alta biodiversidad, presencia de ecosistemas estratégicos y riqueza hídrica, contrasta con indicadores alarmantes de pobreza, exclusión estructural y dependencia

alimentaria. Según el DANE (2022), más del 80 % de la población del Chocó vive en condiciones de pobreza multidimensional, y la inseguridad alimentaria afecta a más del 65 % de los hogares, con picos más altos en municipios rurales y comunidades indígenas y afrodescendientes.

A pesar de contar con suelos fértiles, abundantes lluvias y una tradición agrícola y pesquera ancestral, el Chocó enfrenta múltiples barreras estructurales que limitan la producción local de alimentos. El abandono estatal, se traduce en caminos intransitables, escasa electrificación rural, falta de acceso a mercados, educación técnica insuficiente, y ausencia de políticas diferenciadas para el contexto afro e indígena. A ello se suma la violencia armada persistente, que ha desplazado a miles de familias de sus territorios y ha restringido severamente el acceso a zonas productivas.

En términos culturales, la región cuenta con conocimientos tradicionales robustos sobre la siembra, recolección y preparación de alimentos, pero estos saberes se encuentran en riesgo de erosión ante la penetración de productos industrializados, la pérdida de lenguas originarias y la migración forzada hacia centros urbanos. La dependencia creciente de productos importados o procesados, ha alterado las dietas locales, generando una transición alimentaria nociva para la salud y la identidad cultural.

No obstante, en medio de la adversidad, las comunidades del Chocó han impulsado iniciativas locales de resistencia alimentaria. Experiencias como los sistemas de chagras en comunidades indígenas, las huertas familiares afrodescendientes, las mingas de pesca colectiva y los intercambios solidarios, muestran caminos alternativos de soberanía alimentaria, basados en reciprocidad, autonomía y conocimiento ancestral. Estos procesos, si bien frágiles, constituyen una base vital para la re-territorialización de la alimentación.

Una política alimentaria para el Chocó, requiere necesariamente un enfoque intercultural, territorial y ecológico. Ello implica, reconocer el derecho de las comunidades a definir sus propios sistemas alimentarios, fortalecer la agroecología local, garantizar tierra, agua y protección para líderes comunitarios, y promover

circuitos de comercialización, que valoren la producción tradicional. El desafío, no es solo técnico, sino ético y político; transformar las estructuras coloniales y extractivistas que han marginado históricamente a los pueblos del Pacífico colombiano.

8. Propuestas estratégicas para una seguridad alimentaria sostenible en Colombia

Frente al panorama de inseguridad alimentaria que vive Colombia, se hace urgente impulsar una transformación profunda del sistema alimentario nacional. Esta transformación, debe partir de un enfoque de derechos, sustentabilidad ecológica, equidad territorial e interculturalidad. Las siguientes propuestas buscan trazar horizontes estratégicos para avanzar hacia una verdadera soberanía alimentaria:

- a. **Reforma agraria integral y acceso a la tierra:** Garantizar tierra productiva a selvatinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, es una condición esencial para la producción de alimentos locales. Esta reforma debe incluir, titulación colectiva, acceso al agua, zonas de reserva selvatina y defensa jurídica de los territorios frente al despojo y la especulación.
- b. **Fomento de la agroecología:** La transición hacia sistemas agroecológicos implica, fortalecer las prácticas ancestrales de manejo del suelo, diversificación de cultivos, agricultura regenerativa y recuperación de semillas nativas. Es necesario crear programas de extensión rural agroecológica, financiamiento adecuado, investigación participativa y mercados locales solidarios.
- c. **Construcción de circuitos cortos y mercados territoriales:** Promover ferias selvatinas, plataformas digitales comunitarias, compras públicas locales (escuelas, hospitales, etc.), y redes de consumidores conscientes permite acortar la cadena alimentaria, mejorar precios para el productor y fortalecer economías locales.
- d. **Política pública intercultural y descentralizada:** La seguridad alimentaria debe formularse desde los territorios, incorporando saberes indígenas y afrodescendientes, participación comunitaria y gestión pública desde lo local.

Esto implica descentralizar los recursos y decisiones hacia municipios y regiones.

- e. **Educación alimentaria y cultural:** Fortalecer procesos de educación popular en torno a la alimentación saludable, la cocina tradicional, el consumo consciente y el vínculo con la tierra. Incluir estos temas en el currículo escolar, en medios comunitarios y en campañas públicas.
- f. **Sistemas de información territorializados:** Crear observatorios comunitarios de alimentación, que monitoreen el acceso a alimentos, el estado nutricional y la producción local, con metodologías participativas y enfoque diferencial, que permitan decisiones basadas en datos reales y contextualizados.
- g. **Protección a líderes y procesos comunitarios:** Asegurar garantías de seguridad para las personas que defienden la tierra, el agua y la vida. Sin justicia social y sin paz territorial, no puede existir seguridad alimentaria.

Estas propuestas no deben entenderse como una receta uniforme, sino como un conjunto de caminos posibles, que deben ser adaptados a la diversidad territorial, cultural y ecológica del país. La transformación del sistema alimentario, implica un cambio de paradigma; dejar atrás la lógica extractiva y centralista, y caminar hacia una Colombia que se alimente desde su gente, su tierra y su memoria colectiva.

Por último, la transformación del sistema alimentario, implica un cambio de paradigma que trasciende lo técnico y se adentra en lo ético, lo político y lo cultural. No se trata solamente de alimentar cuerpos, sino de nutrir territorios, de tejer vínculos con la tierra, de re-encantar el acto de sembrar, cosechar y compartir.

9. Conclusiones fundamentales

La seguridad alimentaria en Colombia, no puede ser abordada desde una mirada simplista ni desde la lógica de los paquetes de ayuda humanitaria. Exige, una transformación estructural del sistema agroalimentario, una ruptura con el paradigma del extractivismo agrícola, y una apuesta radical por la vida en todas sus formas. Ello implica, escuchar los territorios, aprender de sus conocimientos,

fortalecer las redes de reciprocidad y construir colectivamente una ética del cuidado, que nos permita alimentar sin destruir, producir sin desarraigar, cultivar sin colonizar.

En territorios como el Chocó, donde la tierra canta con el agua y la memoria habita en cada semilla, se despliega una pedagogía de la resistencia y del renacer. Allí donde la institucionalidad ha fallado, las comunidades han tejido esperanza con las manos, cultivando el futuro en la parcela, en la minga, en la palabra compartida.

Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2009), se trata de pensar desde el sur, de reconocer las epistemologías de los pueblos, y los saberes que han sido silenciados. En el campo de la alimentación, esta re-existencia se manifiesta en las huertas urbanas de mujeres negras, en los fogones comunitarios de las cocineras tradicionales, en las mingas indígenas de yuca dulce, en los trueques selváticos. Todo ello, constituye una ecología de saberes, que permite imaginar otro modelo alimentario; más justo, más vital, más humano.

La seguridad alimentaria, no es un destino técnico, es un camino político y espiritual; es el derecho de cada comunidad a decidir cómo y con qué alimentar sus cuerpos, sus territorios y sus historias. Es, en última instancia, una poética de la existencia; sembrar futuro en la tierra viva del presente.

La situación de inseguridad alimentaria en Colombia, no es una contingencia ni un fenómeno aislado; es el reflejo profundo de un modelo económico extractivista y centralista que históricamente ha marginado a los pequeños productores, invisibilizado las economías propias, y concentrado la tierra en pocas manos. Mientras la agricultura empresarial, se orienta a la exportación, los pueblos rurales y étnicos enfrentan hambre, desnutrición y despojo.

La seguridad alimentaria, no puede reducirse a indicadores cuantitativos ni a la provisión de calorías. Exige una comprensión territorial, relacional y cultural del alimento. La tierra, el agua, la semilla y el conocimiento agroecológico, son bienes comunes que deben ser protegidos y cultivados desde una ética del cuidado. Sin territorio, no hay soberanía alimentaria; sin soberanía, no hay vida digna.

Aunque Colombia cuenta con planes y documentos de política sobre seguridad alimentaria (como el PNSAN), estos han sido débiles, desarticulados y escasamente implementados. Se requiere una política pública robusta, construida desde los territorios, con enfoque diferencial (étnico, de género, de ciclo de vida) y anclada en principios de justicia social, agroecología y democracia alimentaria.

Las comunidades selváticas, indígenas y afrodescendientes, han sostenido históricamente los sistemas alimentarios locales a través de prácticas de siembra, trueque, cocina comunitaria y conservación de semillas. Estas prácticas, son expresiones vivas de una economía regenerativa, relacional y de lo común, que debe ser reconocida como pilar de una transición agroalimentaria justa y resiliente.

La actual concepción de la seguridad alimentaria, muchas veces responde a lógicas tecnocráticas y a soluciones asistencialistas, que despolitizan el problema. Es urgente recuperar la dimensión política, cultural y ecológica del acto de alimentarse. El alimento, no es mercancía, es vida; portador de historia, identidad y vínculos con la tierra.

La seguridad alimentaria, se construye también, desde las epistemologías del sur, desde los conocimientos milenarios sobre el cultivo, el cuidado del suelo, la cosecha lunar, la medicina alimentaria. Estos saberes, muchas veces marginados por la ciencia oficial, son fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la resiliencia territorial.

Garantizar el derecho a una alimentación adecuada, es también, un acto de reparación histórica en un país que ha vivido décadas de conflicto armado, vinculado al acceso a la tierra y al control de los recursos. La seguridad alimentaria, debe ser parte integral de la construcción de paz, del reconocimiento de los derechos territoriales y de la reconciliación con la naturaleza.

Las mujeres rurales, los niños y las comunidades étnicas, son las más afectadas por la inseguridad alimentaria. En ellas recae el peso de la producción, la preparación y la distribución de alimentos. Cualquier estrategia transformadora,

debe reconocer su rol protagónico, y garantizar condiciones de equidad, participación y autonomía.

La seguridad alimentaria futura está en riesgo, debido a la degradación de suelos, el colapso de ecosistemas y el cambio climático. La transición hacia modelos agroecológicos y resilientes es imperativa. Sembrar diversidad, conservar semillas nativas y producir sin agrotóxicos, son apuestas por la vida en su integridad.

Finalmente, este ensayo propone, re-significar el alimento más allá del consumo; comer es un acto político, espiritual y ético. Al cultivar nuestra relación con la tierra, honramos el don de la vida. Reivindicar la soberanía alimentaria, es también, defender el derecho a una existencia plena, interdependiente y digna.

10. Bibliografía consultada

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2019). Tierras y conflictos rurales. Bogotá: CNMH.

Cuesta, T. 2023. Complex Agricultural Thinking: Toward Systemic, Resilient, and Regenerative Agriculture. Instituto Politécnico Sotec.

DANE. (2015). Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN).

DANE. (2022). Boletín técnico: pobreza multidimensional.

DANE. (2022). Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022. <https://www.dane.gov.co>

Defensoría del Pueblo. (2021). Situación de derechos humanos del pueblo wayuu en La Guajira. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

Dejusticia. (2021). Balance de la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

FAO & WFP. (2023). Hunger Hotspots Report: Colombia. <https://www.fao.org>

FAO. (2009). Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. Roma: FAO.

FAO. (2021). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe.

FAO. (2022). Informe mundial sobre crisis alimentarias.

Garay, L. J., Salcedo, J., & Barreto, M. (2023). El hambre en Colombia: una mirada estructural. Bogotá: Indepaz.

ICBF. (2021). Informe de seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

ICBF. (2022). Boletín de seguimiento nutricional de la niñez. Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

IGAC. (2021). Actualización del catastro multipropósito. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Leff, E. (2014). Pensar la complejidad ambiental: saber ambiental, racionalidad ambiental y diálogo de saberes. México: Siglo XXI Editores.

Santos, B. de S. (2009). Una epistemología del sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social. Siglo XXI.

Santos, B. de S. (2010). Una epistemología del sur. México: Siglo XXI Editores.

Via Campesina. (2007). Declaración de Nyéléni sobre la soberanía alimentaria. Mali: Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria.